



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 159/2017
ACTOR: PODER JUDICIAL DE MORELOS
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

En la Ciudad de México, a treinta de mayo de dos mil diecinueve, se da cuenta al **Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, con lo siguiente:

Constancias	Registro
Escrito de Alejandro Becerra Arroyo, delegado del Poder Judicial del Estado de Morelos.	019685

Documental recibida en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintiuno de mayo, del presente año. Conste:

Ciudad de México, a treinta de mayo de dos mil diecinueve.

Agréguense al expediente, para que surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito del delegado del Poder Judicial del Estado de Morelos, personalidad que tiene reconocida en autos, por medio del cual desahoga el requerimiento relacionado con el cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto.

El Poder Judicial **desahoga la vista** dada en proveído de ocho de mayo del presente año, a fin de **manifestar** si con la transferencia realizada por la cantidad de \$750,558.23 M.N. (Setecientos cincuenta mil quinientos cincuenta y ocho pesos 23/100 Moneda Nacional), se cuenta con el numerario suficiente para el pago de pensiones otorgadas por el Poder Legislativo con cargo al Poder Judicial, en las ejecutorias dictadas en las controversias constitucionales **226/2016, 243/2016, 117/2017, 125/2017, 139/2017, 147/2017, 159/2017, 131/2016, 137/2017, y 142/2017**, o manifestara lo que a su derecho convenga en relación con lo informado por el Delegado del Poder Ejecutivo de Morelos, el cual obra en autos.

Al respecto informa, en esencia que el cumplimiento entraña una cuestión formal y otra material, la primera relacionada con la publicación del decreto ciento setenta y nueve (179) de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, del cual se advierte en el "artículo 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 80% del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago de forma mensual con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Decretos Pensionarios controvertidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo Décimo Octavo del Decreto Número Setenta y Seis por el que se Aprueba el presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del Primero de Enero, al 31 de Diciembre de 2019.", y la cuestión material relacionada con la transferencia efectiva de los recursos necesarios para que dicho ente pueda satisfacer la obligación en cuestión.

De lo anterior, según el Poder actor, se advierte que el Congreso del Estado de Morelos determina que es el Poder Judicial del mismo Estado quién se hará cargo de erogar las pensiones, generando una obligación indeterminada en favor del Poder Judicial del Estado, puesto que los decretos jubilatorios no tienen una vigencia específica, ya que su vigencia se encuentra necesariamente vinculada al tiempo de vida del jubilado, por lo que en cumplimiento de la sentencia dictada en la presente controversia constitucional, el Congreso del Estado deberá garantizar

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 159/2017

en cada ejercicio fiscal siguiente los recursos necesarios y suficientes para cubrir todas las obligaciones inherentes al decreto.

Por lo anterior, afirma que **los recursos transferidos no resultan suficientes para cumplir** con todas las obligaciones que impone el decreto jubilatorio, pues el Poder Ejecutivo apartándose de lo manifestado por el Poder Judicial a mediante oficio TSJ/COMISION/ADMON./01573/2019, realiza los cálculos con base a la pensión que viene erogando el Poder Judicial dejando de observar las diversas obligaciones que entraña el decreto jubilatorio como lo son las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos y seguro de vida, además sin considerar el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo.

En ese sentido, sostiene que si bien el Poder Judicial viene erogando la citada pensión, cierto es que ello se realiza de acuerdo al último salario del pensionado, es decir, sin considerar el aumento autorizado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el presente año, ante la falta de recursos económicos para cumplir con el decreto en su totalidad.

Por lo que con base al oficio **TSJ/COMISIÓN/ADMON./01573/2019**, concluye que los recursos necesarios hasta el cierre del ejercicio fiscal 2019 para cumplir con las ejecutorias dictadas en las controversias constitucionales **226/2016**, **243/2016**, **117/2017**, **125/2017**, **139/2017**, **147/2017**, **159/2017**, **131/2016**, **137/2017**, y **142/2017**, ascienden a la cantidad de \$7'225,866.63 M.N. (siete millones doscientos veinticinco mil ochocientos sesenta y seis pesos 63/100 Moneda Nacional); sin que pase desapercibido que el Poder Judicial de Morelos reconoce recibir una transferencia el veintiséis de abril de dos mil diecinueve por la cantidad de \$750,558.23 M.N. (setecientos cincuenta mil quinientos cincuenta y ocho pesos 23/100 Moneda Nacional); sin embargo se advierte que existe una diferencia por recibir de \$6'475,308.40 M.N. (seis millones cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos ocho pesos 40/100 Moneda Nacional);

Atendiendo a lo anterior, es importante señalar que la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia en este asunto el **veinticinco de octubre de dos mil diecisiete**, al tenor de los siguientes puntos resolutivos:

“PRIMERO. *Es procedente y fundada la controversia constitucional.*
SEGUNDO. *Se declara la invalidez parcial del decreto número mil quinientos veinte publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5484.”*

Lo anterior, en virtud de que estimó inconstitucional que la Legislatura de Morelos sea la que decida la procedencia del otorgamiento de la pensión por jubilación afectando el presupuesto del Poder Judicial de la entidad, al ordenar que la pensión debe cubrirse con el presupuesto de dicho poder, sin otorgar efectivamente los recursos necesarios para que dicho ente pueda satisfacer la obligación en cuestión.

En este mismo sentido y de conformidad con el Acuerdo Plenario de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, correspondió al Poder Judicial de Morelos determinar el monto necesario para cubrir las pensiones respectivas, esto mediante oficio número **TSJ/COMISIÓN/ADMON./01573/2019**, y al Congreso del



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Estado de Morelos autorizar la partida presupuestal correspondiente en el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial local, sin que se hubiere reservado en favor de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, un margen de apreciación para determinar el monto necesario, a fin de dar cabal cumplimiento de manera individual a las 116 sentencias recaídas en las controversias constitucionales relativas al pago de pensiones de servidores públicos adscritos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.

Precisado lo anterior, es menester atender las manifestaciones que formula el Poder Judicial de Morelos, en el sentido de que **los recursos transferidos no resultan suficientes para cumplir** con las ejecutorias dictadas en las controversias constitucionales **226/2016, 243/2016, 117/2017, 125/2017, 139/2017, 147/2017, 159/2017, 131/2016, 137/2017, y 142/2017**; comprendidas en el segundo bloque del anexo del Acuerdo General Plenario antes citado, ya que los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos de Estado de Morelos, no se les reservó un margen de apreciación en cuanto al monto de las cantidades necesarias para dar cumplimiento a las sentencias, además el hecho de que el Poder Judicial de Morelos se encuentre realizando los pagos de pensiones de servidores públicos adscritos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, no exime a las restantes autoridades vinculadas a ministrar los recursos indicados por el Poder Judicial, en atención a las consideraciones y a los efectos dictados en la sentencia de mérito, en virtud de que estimó inconstitucional que la Legislatura de Morelos sea quien decida la procedencia del otorgamiento de la pensión por jubilación afectando el presupuesto del Poder Judicial de la entidad, al ordenar que la pensión debe cubrirse con el presupuesto de dicho poder, sin otorgar efectivamente los recursos necesarios para que dicho ente pueda satisfacer en cuestión.

Por otro parte, respecto a lo manifestado por el Poder Judicial local, en relación a las supuestas inconsistencias en la asignación del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2019, quedan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que corresponda, ya que no es materia en la presente controversia constitucional.

En consecuencia, con copia simple del escrito de cuenta dese vista al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para en que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo y en términos del Punto Segundo de la Tercera Parte del Acuerdo del Tribunal Pleno antes citado, suministre de manera inmediata los \$6'475,308.40 M.N. (seis millones cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos ocho pesos 40/100 Moneda Nacional) que refiere el Poder Judicial del Estado de Morelos para dar cumplimiento a las sentencias de las controversias constitucionales **226/2016, 243/2016, 117/2017, 125/2017, 139/2017, 147/2017, 159/2017, 131/2016, 137/2017, y 142/2017**, en el sentido de que las pensiones a cargo del Poder Judicial de Morelos deben cubrirse con los recursos que provea el Congreso del Estado de Morelos para satisfacer la obligación en cuestión, tal como se ordenó en el acuerdo presidencial de fecha veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en este asunto, esto es bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se decidirá lo que en derecho proceda con los elementos que obran en autos sobre el cumplimiento de las ejecutorias de mérito.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 159/2017

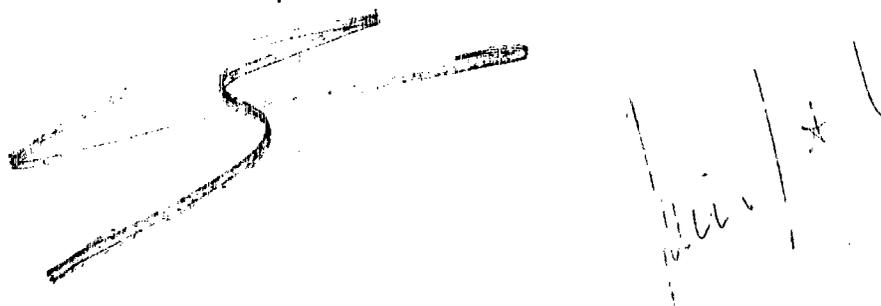
Lo anterior, con fundamento en los artículos 11, párrafo primero¹, 46, párrafo primero², y 50³ de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el apercibimiento de que el desacato dará lugar a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, se: “[...] **turnará el asunto al ministro ponente para que someta al Pleno el proyecto por el cual se aplique el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**” y, tal como fue señalado en el Acuerdo Plenario de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve.

Ahora, teniendo en cuenta lo manifestado por la autoridad oficiante, con fundamento en el artículo 46, párrafo primero, de la citada Ley Reglamentaria, **se requiere nuevamente a las autoridades vinculadas por el fallo constitucional**, por conducto de quien legalmente las representa, para que continúen informando oportunamente los actos tendentes a su cumplimiento, en términos del punto Segundo, fracción IV del acuerdo plenario de mérito.

Por lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 287⁴ del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del artículo 1⁵ de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **hágase la certificación de los días en que transcurre el plazo otorgado al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos mediante éste proveído.**

Notifíquese.

Lo proveyó y firma el **Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, quien actúa con la Maestra Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe.



Esta hoja forma parte del acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictado por el **Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, en la **controversia constitucional 159/2017**, promovida por el Poder Judicial de Morelos. Conste. CCR/NAC 5

¹ Artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. [...]

² Artículo 46. Las partes condenadas informarán en el plazo otorgado por la sentencia, de cumplimiento de la misma al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien resolverá si aquella ha quedado debidamente cumplida. [...]

³ Artículo 50. No podrá archivarse ningún expediente sin que quede cumplida la sentencia o se hubiere extinguido la materia de la ejecución.

⁴ Artículo 287. En los autos se asentará razón del día en que comienza a correr un término y del en que deba concluir. La constancia deberá asentarse precisamente el día en que surta sus efectos la notificación de la resolución en que se conceda o mande abrir el término. Lo mismo se hará en el caso del artículo anterior.

⁵ Artículo 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.